

ARTÍCULO 14

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalear discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Así reza el primer artículo de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). La igualdad conforma uno de los pilares básicos de la divisa de la Revolución francesa “Libertad, Igualdad, Fraternidad” y lo convierte en uno de las reivindicaciones más importantes del liberalismo político decimonónico en toda Europa, incluida España.

Hasta ese momento la desigualdad jurídica había sido la norma. Hasta bien entrado el siglo XIX nacer en Europa en una familia noble o campesina determinaba el futuro de cada persona, igual que ser judío o católico, hombre o mujer.

Desde el punto de vista constitucional, la igualdad jurídica no se vio reconocida expresamente en ningún texto constitucional hasta la Constitución republicana de 1931, que en su artículo 2 proclamaba la igualdad ante la ley de todos los españoles, mientras que el artículo 25 recogía la prohibición de discriminación por determinadas circunstancias (naturaleza, filiación, sexo, clase social, riqueza, ideas políticas y creencias religiosas).

Durante el Franquismo, la discriminación fue algo consustancial a las arbitrariedades de la dictadura: la mayoría de las opiniones estaban castigadas, los cultos no católicos prohibidos y la mujer supeditada al varón.

Algunos ejemplos de ello son el artículo 57 del Código Civil, que se expresaba así: “El marido ha de proteger a la mujer y ésta obedecerle”. Hasta 1958 las mujeres no fueron autorizadas por la ley a ser tutoras o testigos en testamentos, aunque las casadas seguían necesitando permiso del marido, y hasta 1973, las solteras no pudieron abandonar el hogar paterno antes de los veinticinco años.

Hasta 1966 no se permitió a las mujeres ejercer como magistrados, jueces y fiscales de la Administración de Justicia. Y hasta 1975 la mujer casada continuó necesitando el permiso de su marido para firmar contratos de trabajo, ejercer el comercio y usufructuar su salario. Por supuesto, el adulterio estaba especialmente penado si lo cometía una mujer.

Durante los últimos cuarenta años, las desigualdades jurídicas han ido disminuyendo, aunque aún siga habiendo algunos casos de discriminación legal.

Uno de estos casos, recientemente, abolido, ha sido el de los discapacitados intelectuales, que no podían participar en las votaciones. Esto afectaba a un colectivo de unas 100.000 personas en toda España que, por razón de su discapacidad, sufrían esa discriminación. La mayoría de los partidos políticos apoyaron la reforma de la ley para que estos ciudadanos tuvieran pleno derecho al sufragio activo.

Otro caso de desigualdad, que afecta en este caso a un colectivo por razón de creencias religiosas, es la de las confesiones minoritarias, musulmanes, judíos o evangélicos, que denuncian que los ayuntamientos no ceden sus espacios para abrir lugares de culto con tanta facilidad como lo hacen con la Iglesia Católica.

Por último, queriendo enmendar la eterna e histórica desigualdad de género, la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres) discrimina positivamente a las mujeres, dejando a los hombres en desigualdad jurídica. Entendemos que igualdad real significa que no exista ninguna discriminación por ser hombre o mujer.

María S., Carmen R., Graciela L., Jing H.X., Daniel C. y Marco de A. (3º C/D)